

**INE/CG308/2019**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE SU CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL EN EL DISTRITO XI, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL C. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

Ciudad de México, 8 de julio de dos mil diecinueve.

**VISTO** para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**, integrado por presuntos hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

### **ANTECEDENTES**

**I. Escrito de queja.** El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Quintana Roo, el escrito de queja presentado por el Lic. Daniel Israel Jasso Kim, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco; denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Quintana Roo. (Fojas de la 01 a la 25 del expediente)

**II. Hechos denunciados y elementos probatorios.** De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito:

“(…)

### **HECHOS**

*1.- El 11 de enero de 2019, se declaró el inicio del procedimiento electoral local ordinario 2019 para elegir diputaciones locales en el estado de Quintana Roo, de conformidad con el Acuerdo INE/CG1176/2018 y el Decreto 198 de la H. XV Legislatura Constitucional del Estado.*

*2.- El pasado 15 de abril de 2019 dio inicio el periodo de campaña para la elección de diputaciones locales en el estado de Quintana Roo para concluir el 29 de mayo del mismo año.*

*3.- Que, en este contexto, el actual candidato a diputado local por el Distrito Local XI, **Carlos Rafael Hernández Blanco**, difundió su imagen a través de una inserción pagada en la portada y en el cuerpo de la revista “Boletín México”, publicada en el mes de marzo de 2019.*

*Dicha propaganda electoral, evidentemente contratada se describe en seguida:*

*1. **TIEMPO:** Inserciones publicadas en la Revista “Boletín México” correspondiente al volumen 16, Publicada en marzo 2019.*

*2. **LUGAR:** Inserción de la imagen del candidato denunciado en la portada y en el cuerpo de la revista Boletín México (BM).*

*3. **MODO:** En la portada de la revista aparece el candidato a diputado local, **Carlos Hernández Blanco**, vistiendo una camisa blanca con cuello rojo, mirando de perfil hacia arriba, el título que lo describe es “CARLOS HERNANDEZ BLANCO ASPIRANTE A DIPUTADO DISTRITO XI”:*

*4. Dicha publicación la encontré físicamente el día lunes 20 de mayo del presente año, en las instalaciones del restaurante “100% Natural”, ubicado en la 5ª Av. Manzana 2/8 No. 209-1 x 10 y 12 de la colonia centro, 77720, de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo.*

5. De igual forma, procedí a ubicarla de forma digital en la dirección establecida en la edición, la cual es [www.boletinmexico.com](http://www.boletinmexico.com), encontrando que la siguiente imagen:



6. Al explorar dicha página web, la portada de la misma publicación denunciada se encuentra alojada en la parte inferior del lado derecho, y al darle “click” en la imagen, inmediatamente se descarga la citada publicación.



7. Como resultado de las acciones anteriores, se obtiene la descarga digital de la revista siguiente:



8. En la página del contenido aparece nuevamente el candidato mostrando una hoja que sostiene con ambas manos, se puede percibir los logotipos de su partido político en blanco y negro.





**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

**10.** Cabe señalar que dicha publicación, también es visible de forma digital desde la dirección de internet <http://bmnoticias.com/> y se puede descargar de la dirección <http://bmnoticias.com/download/7026/>. Direcciones de internet sobre las cuales solicito a esta autoridad, de fe de la existencia y contenido de las mismas a través de la inspección ocular que se sirva solicitar mediante la oficialía electoral correspondiente.

**11.** Como se puede apreciar, la supuesta entrevista, constituye propaganda electoral evidentemente contratada con la revista “Boletín México”, ya que la imagen del candidato ocupa la mayoría del espacio de la portada, además se le dedica una sección donde se difunden supuestos logros como servidor público, asimismo contesta preguntas que tienen que ver con el actual procedimiento electoral en Quintana Roo.

Así, la conducta que se describe desplegada por el candidato **Carlos Rafael Hernández Blanco**, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, son de hecho contraventoras a la normativa electoral al tenor de las siguientes consideraciones de:

**DERECHO**

(...)

De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la conducta denunciada a todas luces devine ilegal en virtud de que el candidato denunciado obvió deliberadamente el registro de dicha inserción publicitaria evidentemente pagada con la finalidad de engañar a la autoridad electoral ocultando y omitiendo el debido reporte de gastos de campaña en los plazos previstos por el Reglamento de Fiscalización.

(...)

De igual forma en atención a que dicha inserción constituye un beneficio directo a la campaña del candidato a diputado local en el Estado de Quintana Roo, Carlos Rafael Hernández Blanco, en su caso, se solicita a esta H. Autoridad Fiscalizadora Nacional, calcule el monto de dicho beneficio a efecto de que se sume a sus gastos de campaña.

A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes:

**PRUEBAS**

**1. DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en certificación expedida por el Secretario Ejecutivo de dicho Órgano Electoral, con la cual me

*acredito como Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo.*

**2. DOCUMENTAL PRIVADA.** *Consistente en un ejemplar de la revista “Boletín México”, publicación número 16 correspondiente a marzo 2019.*

*Con este ejemplar, se demuestra en primer término la existencia de una inserción pagada por parte del candidato denunciado para promocionar su imagen apareciendo de forma predominante en la portada de la revista “Boletín México”, y en el contenido de la misma, por lo que se presume que estos gastos no fueron reportados ante esta autoridad nacional fiscalizadora en materia electoral.*

**3. TÉCNICA.** *Consistente en un disco compacto, con diversas imágenes y capturas de pantalla, así como la edición digital de la revista denunciada.*

*Respecto a esta probanza, solicito desde sé de fe de las mismas mediante la inspección ocular que se sirva solicitar esta autoridad a través de la oficialía electoral.*

**4. LA DOCUMENTAL PRIVADA.** *Consistente en los contratos, facturas, formas de pago, ya sea en efectivo, cheque o transferencia bancaria y demás información que obtenga esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que en ejercicio de su facultad de investigación obtenga con las diligencias de requerimiento de información al candidato, **Carlos Rafael Hernández Blanco**, así como al **Partido Revolucionario Institucional**.*

**5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** *Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento, si como la respuesta que se produzca por parte de los denunciados.*

**6. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.** *Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.*

*Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos de hechos y de derecho del presente ocuroso.*

*(...)”*

**III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.** El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente **INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de su inicio; notificar y emplazar a los sujetos incoados; así como publicar el acuerdo respectivo en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 26 del expediente)

**IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.**

**a)** El tres de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 28 del expediente)

**b)** El seis de junio de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento respectiva y mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 29 del expediente)

**V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7815/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 30 del expediente)

**VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.** El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7816/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 31 del expediente)



**VII. Notificación de admisión de queja, inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.**

**a)** El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7917/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, para que contestara por escrito lo que considerara conveniente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 35 a la 47 del expediente)

**b)** El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la citada Representante dio contestación a la notificación de inicio y emplazamiento señalados en el párrafo que antecede, mismo que, de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a continuación, se transcriben en su parte conducente las consideraciones vertidas por el citado Representante: (Fojas de la 48 a la 60 del expediente)

“(…)

**CAUSAS DE IMPROCEDENCIA**

*Solicito respetuosamente el desechamiento de la queja que se contesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 466 párrafo 1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por actualizarse las causales de improcedencia siguientes:*

*Artículo 466.*

*1. La queja o denuncia será improcedente cuando:*

...

*d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; **o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.***

*No obstante de ser evidente la improcedencia de la queja que motiva la formulación del presente escrito, y a efecto de no ubicar a mi representado en estado de indefensión en caso de que se decidiera entrar al estudio de fondo del asunto, procedo de manera cautelar a dar respuesta a la denuncia conforme a lo siguiente:*

### **CONTESTACIÓN DE HECHOS**

*La infracción que se le imputa a mi representado conforme a la denuncia y al emplazamiento efectuado, consistente en la supuesta vulneración a lo dispuesto en el artículo 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 38, numerales 1 y 5; 82, numeral 2; 96, numeral 1; 106, numerales 2 y 4; 121; 223 numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización por la supuesta omisión del reporte de gastos de campaña y la supuesta aportación de ente prohibido, a favor de mi candidatura, al cargo de diputado local Distrito XI, en el Estado de Quintana Roo, derivada de la presunta difusión de su imagen y propaganda electoral a través de una inserción pagada en la portada y cuerpo de la revista “Boletín México (BM)”, número 16, año 1, publicada en marzo de 2019, de manera física y electrónica; así como la omisión de contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y, en consecuencia, un posible rebase de topes de gastos de campaña.*

*En primer término, el quejoso parte de una apreciación incorrecta pues de la entrevista que le realizó la revista Boletín México (BM), a Carlos Hernández Blanco, y que fue publicada en marzo de 2019, pretende deducir la existencia de propaganda electoral y, en consecuencia, la omisión de reportar el supuesto gasto de campaña. Se afirma lo anterior, pues del análisis de la pieza periodística cuestionada se deduce que no se está en presencia de propaganda electoral, como a continuación se expone.*

*En este sentido, el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del INE, relativo a los criterios para la identificación del beneficio a una campaña electoral señala:*

*(...)*

*En este tenor, la publicación denunciada no constituye propaganda electoral, derivado de lo siguiente:*

- 1. Se trata de una pieza periodística consistente en una entrevista. Esto es, se está en presencia de un auténtico ejercicio periodístico amparado en la libertad de expresión, sin una finalidad de posicionar indebidamente a un candidato.*
- 2. La entrevista se realiza por la revista y contiene una serie de cuestionamientos de interés general para la ciudadanía, relativos a la trayectoria como figura pública de Carlos Hernández Blanco, de dicha entrevista se puede apreciar, que el ciudadano Carlos no hace manifestación alguna en la que contenga llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o*

*un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un partido político.*

*La Sala Superior igualmente ha sostenido que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña.*

*En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, se debe verificar si la comunicación sometida a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o partido, publicita plataformas electorales o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura o un puesto de elección.*

*Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que ejemplificativamente se mencionan enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquellas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido.*

*Así, la Sala Superior consideró que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se analiza: prevenir y sancionar solamente aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal que no resultaría justificado restringir contenidos del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.*

*3. La imagen que aparece tanto en la portada como en páginas interiores se encuentra justificada porque es una entrevista que realiza un medio de comunicación sobre una figura pública.*

*4. La revista “Boletín México (BM)”, es una publicación periódica, cuya edición número 16, publicada en marzo de 2019, aborda diversas temáticas de interés general a la población de Quintana Roo, esto es, no se trata de una publicación que haya tenido como único fin publicar y difundir la entrevista con la imagen de Carlos Hernández Blanco, ni fue publicada ex profeso para difundir la entrevista.*

*(...)*

*Ahora bien, al tratarse de un auténtico ejercicio periodístico, derivado del derecho de informar que tienen los medios de comunicación, información de interés general, entre la cual se encuentra el que la población conozca los perfiles y trayectoria de las personas que participan como aspirantes, precandidatos y candidatos en una contienda electoral, pues solo a través del conocimiento de sus antecedentes personales y profesionales la ciudadanía podrá conocerlos; en consecuencia, la autoridad electoral deberá de aplicar la presunción de licitud sobre la labor periodística al no existir ningún elemento de prueba que desvirtué dicha licitud.*

*Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro siguiente:*

**PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.** - De lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

(...)

### **OBJECIÓN A LAS PRUEBAS**

*Se objetan todas y cada una de las pruebas que ofrece la parte quejosa contenidas en autos del expediente en el que se actúa por las razones que se exponen en el cuerpo del presente escrito, en cuanto al alcance y valor probatorio que se les pretende dar en contra de la parte que represento, en razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba idóneos para probar los hechos materia del presente procedimiento sancionador. Aunado a lo anterior, es principio general de derecho que “quien afirma está obligado a probar”.*

*A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco como pruebas de descargo de mi parte, las siguientes:*

**PRUEBAS**

**INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** - *Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento.*

**PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.** - *Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.*

*Las anteriores probanzas se relacionan con todos y cada uno de los hechos y consideraciones jurídicas hechas valer en el presente escrito.  
(...)*

**VIII. Notificación de admisión de queja, inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.**

**a)** El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/01JDE/VS/0340/2019, se notificó la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, para que contestara por escrito lo que considerara conveniente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 63 a la 81 del expediente)

**b)** El diez de junio de dos mil diecinueve, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco, dio contestación a la notificación de inicio y emplazamiento señalados en el párrafo que antecede, mismo que, de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a continuación, se transcriben en su parte conducente las consideraciones vertidas por el citado Representante: (Fojas de la 82 a la 93 del expediente)

“(...)

**CAUSAS DE IMPROCEDENCIA**

*Solicito respetuosamente el desechamiento de la queja que se contesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 466 párrafo 1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por actualizarse las causales de improcedencia siguientes:*

Artículo 466.

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

...

d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; **o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.**

*No obstante de ser evidente la improcedencia de la queja que motiva la formulación del presente escrito, y a efecto de no ubicar a mi representado en estado de indefensión en caso de que se decidiera entrar al estudio de fondo del asunto, procedo de manera cautelar a dar respuesta a la denuncia conforme a lo siguiente:*

### **CONTESTACIÓN DE HECHOS**

*La infracción que se le imputa al suscrito conforme a la denuncia y al emplazamiento efectuado, consistente en la supuesta vulneración a lo dispuesto en el artículo 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 38, numerales 1 y 5; 82, numeral 2; 96, numeral 1; 106, numerales 2 y 4; 121; 223 numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización por la supuesta omisión del reporte de gastos de campaña y la supuesta aportación de ente prohibido, a favor de mi candidatura, al cargo de diputado local Distrito XI, en el Estado de Quintana Roo, derivada de la presunta difusión de su imagen y propaganda electoral a través de una inserción pagada en la portada y cuerpo de la revista "Boletín México (BM)", número 16, año 1, publicada en marzo de 2019, de manera física y electrónica; así como la omisión de contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y, en consecuencia, un posible rebase de topes de gastos de campaña.*

*En primer término, el quejoso parte de una apreciación incorrecta pues de la entrevista que le realizó la revista Boletín México (BM), a Carlos Hernández Blanco, y que fue publicada en marzo de 2019, pretende deducir la existencia de propaganda electoral y, en consecuencia, la omisión de reportar el supuesto gasto de campaña. Se afirma lo anterior, pues del análisis de la pieza periodística cuestionada se deduce que no se está en presencia de propaganda electoral, como a continuación se expone.*

*En este sentido, el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del INE, relativo a los criterios para la identificación del beneficio a una campaña electoral señala:*

(...)

*En este tenor, la publicación denunciada no constituye propaganda electoral, derivado de lo siguiente:*

- 1. Se trata de una pieza periodística consistente en una entrevista. Esto es, se está en presencia de un auténtico ejercicio periodístico amparado en la libertad de expresión, sin una finalidad de posicionar indebidamente a un candidato.*
- 2. La entrevista se realiza por la revista y contiene una serie de cuestionamientos de interés general para la ciudadanía, relativos a la trayectoria como figura pública de Carlos Hernández Blanco.*
- 3. La imagen que aparece tanto en la portada como en páginas interiores se encuentra justificada porque es una entrevista que realiza un medio de comunicación sobre una figura pública.*
- 4. La revista “Boletín México (BM)”, es una publicación periódica, cuya edición número 16, publicada en marzo de 2019, aborda diversas temáticas de interés general a la población de Quintana Roo, esto es, no se trata de una publicación que haya tenido como único fin publicar y difundir la entrevista con la imagen de Carlos Hernández Blanco, ni fue publicada ex profeso para difundir la entrevista.*

*(...)*

*Ahora bien, al tratarse de un auténtico ejercicio periodístico, derivado del derecho de informar que tienen los medios de comunicación, información de interés general, entre la cual se encuentra el que la población conozca los perfiles y trayectoria de las personas que participan como aspirantes, precandidatos y candidatos en una contienda electoral, pues solo a través del conocimiento de sus antecedentes personales y profesionales la ciudadanía podrá conocerlos; en consecuencia, la autoridad electoral deberá de aplicar la presunción de licitud sobre la labor periodística al no existir ningún elemento de prueba que desvirtué dicha licitud.*

*Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro siguiente:*

**PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.** - De lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos

*Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.*

*(...)*

### **OBJECIÓN A LAS PRUEBAS**

*Se objetan todas y cada una de las pruebas que ofrece la parte quejosa contenidas en autos del expediente en el que se actúa por las razones que se exponen en el cuerpo del presente escrito, en cuanto al alcance y valor probatorio que se les pretende dar en contra de la parte que represento, en razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba idóneos para probar los hechos materia del presente procedimiento sancionador. Aunado a lo anterior, es principio general de derecho que “quien afirma está obligado a probar”.*

*A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco como pruebas de descargo de mi parte, las siguientes:*

### **PRUEBAS**

***INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.*** - *Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento.*

***PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.*** - *Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.*

*Las anteriores probanzas se relacionan con todos y cada uno de los hechos y consideraciones jurídicas hechas valer en el presente escrito.*



(...)"

**IX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.**

a) El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/489/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación respecto de la existencia y contenido de diversas direcciones electrónicas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas de la 94 a la 96 del expediente)

b) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/1077/2019, la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, dio respuesta a la solicitud de certificación formulada por esta autoridad, remitiendo el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/117/2019 conteniendo la certificación solicitada. (Fojas de la 91 a la 109 del expediente)

**X. Solicitud de información y vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo.**

a) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/QROO/JLE/VE/3560/2019, se requirió diversa información y se le dio vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de que en el escrito de queja se denuncian presuntos actos anticipados de campaña realizados por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco. (Fojas de la 112 a la 116 del expediente)

b) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio SE/862/2019, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 117 a la 118 del expediente)

c) El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/QROO/JLE/UTF/3724/2019, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, informara si derivado de los hechos que se le hicieron de su conocimiento mediante oficio INE/QROO/JLE/VE/3560/2019, se inició procedimiento sancionador alguno. (Fojas de la 182 a la 185 del expediente)

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

**d)** El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio SE/903/19, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo informó que derivado de la vista formulada mediante oficio INE/QROO/JLE/VE/3560/2019, se emitió la constancia de registro del procedimiento especial sancionador número IEQROO/PES/120/19, con auto de reserva de admisión. (Fojas de la 186 a la 187 del expediente)

**e)** El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio SE/914/2019, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización, informara los datos de localización de la persona moral “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”. (Fojas de la 190 a la 191 del expediente)

**f)** El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/QROO/JLE/UTF/3897/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió la información solicitada. (Fojas de la 194 a la 196 del expediente)

**XI. Requerimiento de información a la C. Estefhany Irais Cervantes Pat, en su carácter de editora de la Revista “BM Boletín México”.**

**a)** El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/VE/0230/2019, se notificó por estrados a la C. Estefhany Irais Cervantes Patt, Editora de la revista “BM Boletín México”, notificado por estrados, se solicitó diversa información y documentación en relación a los hechos investigados. (Fojas de la 123 a la 149 del expediente)

**b)** El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el Apoderado Legal de Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento de información dirigido a la C. Estefhany Irais Cervantes Pat, en su carácter de editora de la Revista “BM Boletín México”.

**XII. Solicitud de Información a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización.**

**a)** El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/493/2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa información respecto de Boletín México y Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V. (Foja 150 del expediente)

b) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número INE/UTF/DAOR/0761/2019 signado por la Subdirectora de Metodologías y Administración de Riesgos, dio respuesta al requerimiento de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 236 a la 248 del expediente).

**XIII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de la Revista “BM Boletín México” y/o “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”.**

a) El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/VE/0231/2019, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de la Revista “BM Boletín México” y/o “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”, diversa información y documentación en relación a los hechos investigados. (Fojas de la 155 a la 169 del expediente)

b) El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el Apoderado Legal de Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 170 a la 179 del expediente).

**XIV. Razón y Constancia.**

a) El cuatro de junio de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos legales a que haya lugar que, a efecto de ubicar el domicilio del C. Carlos Rafael Hernández Blanco y la C. Estefhany Irais Cervantes Pat, se realizó una consulta, en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (<https://siirfe.ine.mx/home/>), en el cual se localizaron los registros correspondientes de los cuales se obtuvieron los domicilios inscritos en dicha base de datos y del cual se extrajo la “cédula de detalle” con los datos de identificación de los ciudadanos señalados. (Fojas de la 32 a la 34 del expediente).

b) El catorce de junio de dos mil diecinueve, se hizo constar la consulta que se realizó a la dirección electrónica <http://www.boletinmexico.com/> localizándose diversas publicaciones virtuales de la revista “Boletín México (BM)”, las cuales fueron descargadas y se encuentran anexas a la razón y constancia respectiva. (Fojas de la 188 a la 189 del expediente).

c) El veinte de junio de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos legales a que haya lugar que, se ingresó al Sistema Integral de Fiscalización <https://sif.ine.mx/loginUTF/contabilidad>, a efecto de verificar si en la contabilidad

61767, correspondiente al candidato Carlos Rafael Hernández Blanco, postulado por el Partido Revolucionario Institucional a Diputado Local por el Distrito XI, en Cozumel, estado de Quintana Roo, obra registro alguno por concepto de la contratación de medios impresos a favor del candidato. (Fojas de la 249 a la 250 del expediente).

**XV. Acuerdo de alegatos.** El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a las partes; para que, en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 197 del expediente)

**XVI. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.**

a) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8453/2019, se notificó al Partido Acción Nacional a través de su representación, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas de la 200 a la 201 del expediente).

b) El veintitrés de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el citado representante presentó sus alegatos. (Fojas de la 202 a la 208 del expediente).

**XVII. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional.**

a) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8452/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a través de su representación, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas de la 198 a la 199 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta alguna.

**XVIII. Notificación de alegatos al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.**

a) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/01JDE/VS/0388/2019 se notificó al C. Carlos Rafael Hernández Blanco,

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas de la 212 a la 225 del expediente).

**b)** El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el citado candidato presentó sus alegatos. (Fojas de la 226 a la 235 del expediente).

**XIX. Cierre de Instrucción.** El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

**XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, por la Consejera Electoral Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y los Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciró Murayama Rendón y el Consejero Presidente Doctor Benito Nacif Hernández.

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

**2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.** Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud que los sujetos incoados lo hacen valer en su escrito de contestación al emplazamiento y alegatos, al invocar el artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y aducir que el presente procedimiento es improcedente, toda vez que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la citada Ley General.

Al respecto, esta autoridad procede a entrar a su estudio para determinar si, en el presente caso se actualiza la causal invocada o se advierte la existencia de cualquier otra, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización<sup>1</sup>, cuyo precepto dispone lo siguiente:

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de  
Fiscalización**

**“Artículo 30.**

***Improcedencia***

***1. El procedimiento será improcedente cuando:***

***I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.***

---

<sup>1</sup> Si bien los sujetos denunciados hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que es de aplicación supletoria al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, de conformidad con el artículo 3 del citado ordenamiento, lo cierto es que dicha supletoriedad aplicará únicamente en lo no previsto expresamente en dicho Reglamento, sin embargo, al establecerse causales de improcedencia en el reglamento citado, se procederá a estudiar la causal de improcedencia contenida 30, numeral 1, fracción I del ordenamiento en comento atendiendo a la intención de los sujetos incoados, relativo a que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la normatividad electoral.

*En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto.  
(...)"*

En este orden de ideas, es oportuno precisar que el concepto de denuncia referido en el escrito de queja son presuntos gastos no reportados, o en su caso, la aportación de ente prohibido, derivado de la publicación realizada durante el periodo de intercampaña, de una entrevista en la revista "BM Boletín México" número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019, en la cual en concepto del quejoso constituye propaganda electoral a favor del candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco.

En esa tesitura, es menester contrastar lo denunciado en el escrito de queja con la causal de improcedencia en comento con la finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se expone a continuación:

En relación a la causal de improcedencia contenida en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, es preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos y campañas electorales de los candidatos.

Asimismo, el quejoso proporcionó pruebas y datos mínimos o indiciarios<sup>2</sup> para que esta autoridad en el ejercicio de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda sobre el objeto de su denuncia.

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia esgrimida por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández

---

<sup>2</sup> Cuya valoración, análisis y alcance o eficacia probatoria serán analizados en el apartado correspondiente al estudio de fondo.

Blanco, ni se advierte actualización de alguna otra, lo conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve.

**3. Estudio de fondo.** Que una vez fijada la competencia y analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar presuntos gastos no reportados, o en su caso, la aportación de ente prohibido, derivado de la publicación realizada durante el periodo de intercampana, de una entrevista en la revista “BM Boletín México” número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019, en la cual en concepto del quejoso constituye propaganda electoral a favor del candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco; y derivado de lo anterior, si se actualiza el rebase del tope de gastos de campana del citado candidato, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018- 2019 en el estado de Quintana Roo.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 121 y 127 del Reglamento de Fiscalización.

#### **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

**“Artículo 443.**

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley:*

*(...)*

*f) Exceder los topes de gastos de campana.*

*(...)”*

#### **Ley General de Partidos Políticos**

**“Artículo 25.**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

*(...)*

*i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;*



(...)

**Artículo 54.**

*1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:*

- a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;*
- b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;*
- c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;*
- d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;*
- e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;*
- f) Las personas morales, y*
- g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.*

(...)

**Artículo 79.**

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

(...)

*b) Informes de Campaña:*

*I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)"*

**Reglamento de Fiscalización**

**“Artículo 121.**

***Entes impedidos para realizar aportaciones***

*1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:*

- a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.*
- b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.*
- c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.*
- d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.*
- e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.*

- f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.*
- g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.*
- h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.*
- i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*
- j) Las personas morales.*
- k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.*
- l) Personas no identificadas.*
- (...)*

**Artículo 127.**

**Documentación de los egresos**

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*
- 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*
- 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.*  
*(...)"*

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad que el mismo se encuentre debidamente reportado.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio que se trate.

Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de los sujetos obligados.

Para tener certeza que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados. De esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral cada uno de los gastos erogados por concepto de las inserciones antes señaladas.

Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e imparcialidad; pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva. Esto con la finalidad que ésta se desarrolle en un marco de legalidad, ya que, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente la totalidad de los egresos que realicen. Ello permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.

De igual manera, la normativa citada dispone la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización; en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña. Ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, el sujeto obligado vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos están obligados a cumplir.

De igual forma, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen la obligación de los sujetos obligados de recibir aportaciones de determinados entre considerados impedidos, así como un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las

actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es importante señalar que la violación a las prohibiciones expresadas en los preceptos antes señalados importa la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la observación de las normas señaladas es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el sujeto obligado tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permite precisamente la fiscalización.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los

partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Así las cosas, resulta imperativo analizar si los hechos materia del presente procedimiento actualizan la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve:

- El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Quintana Roo, un escrito de queja signado por el Lic. Daniel Israel Jasso Kim, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, ubicado en Cozumel, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco.
- De los hechos narrados en el escrito de queja y de los elementos de prueba aportados por el quejoso, se denuncia:
  1. La presunta omisión del reporte de gastos por parte del C. Carlos Rafael Hernández Blanco, candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, derivado de la publicación de una entrevista en la revista “BM Boletín México” número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

2. En concepto del quejoso, dicha entrevista constituye propaganda electoral a favor de los sujetos incoados por la difusión de la imagen del citado candidato en la portada y cuerpo de la revista “Boletín México (BM)” número 16, del Año 1, publicada en marzo de 2019, de manera física y electrónica.

- Finalmente, de configurarse alguna de las conductas infractoras descritas anteriormente, se procederá a estudiar si se genera un rebase al tope de gastos de la campaña para la elección del cargo de Diputado Local por el Distrito Electoral XI, en el estado de Quintana Roo, fijado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019 en la entidad referida.

De las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, para acreditar la comisión de las conductas denunciadas, se desprende lo siguiente:

- Un ejemplar de la publicación 16, del Año 1, de la revista “Boletín México (BM)”, concerniente al mes de marzo del presente año.

La citada prueba genera indicios sobre la publicación realizada por la revista “Boletín México (BM)”, a favor del C. Carlos Rafael Hernández Blanco, en cuyo contenido se puede observar una entrevista de dos páginas, conformada por once preguntas y tres imágenes; una de ellas colocada en la portada. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

Descripción	Imagen
<p>Nombre: C. Carlos Hernández Blanco.</p> <p>Aspirante a candidato a Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo.</p> <p>Publicación número 16, de marzo de 2019.</p> <p>En la edición en comento se puede observar:</p> <p>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que contiene el candidato.</p>	



# CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO

Descripción	Imagen
<p>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</p> <p>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano. Once preguntas con temas sobre su carrera política, la política a nivel nacional, su experiencia como Presidente Municipal y manifiesta como se puede mejorar Cozumel.</p> <p>- No se advierte opinión o posición a favor o en contra por parte del entrevistador con relación a las manifestaciones realizadas por la persona entrevistada.</p>	

- Un disco compacto, que contiene cinco imágenes y el formato electrónico de la publicación 16, del Año 1, de la revista “Boletín México (BM)”, concerniente al mes de marzo del presente año.

Esta prueba técnica se encuentra conformada por cinco capturas de pantalla en las que se muestra el modo de acceso a efecto de realizar la descarga electrónica del ejemplar denunciado, asimismo se adjunta la descarga realizada.

- Las ligas electrónicas: [www.boletinmexico.com](http://www.boletinmexico.com), <http://bmnoticias.com/> y <http://bmnoticias.com/download/7026/>

Dichos elementos probatorios, constituyen pruebas técnicas, mismas que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

Ahora bien, con relación al ejemplar número 16, del Año 1, de la revista “Boletín México (BM)”, concerniente al mes de marzo del presente año, presentado como prueba, constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hace prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los hechos denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los siguientes apartados **A) Diligencias realizadas** y **B) Propaganda electoral, libertad de expresión y análisis de la entrevista**.

#### **A) Diligencias realizadas.**

Una vez admitido el escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó notificar la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, por medio de su Representante Propietaria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a su candidato a Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco; para que contestaran por escrito lo que consideraran pertinente, expusieran lo que a su derecho conviniera, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

En respuesta al emplazamiento, los sujetos incoados presentaron diversos escritos mediante los cuales manifestaron lo siguiente:

- Que la Revista “Boletín México”, realizó una entrevista al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, misma que fue publicada en marzo de dos mil diecinueve.
- Las imágenes que aparecen en la portada, como en las páginas interiores se encuentran justificadas, dado que es una entrevista que realiza un medio de comunicación sobre una figura pública.
- Dentro de la entrevista, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco no hace manifestación alguna en la que contenga un llamado al voto, en contra o a favor de una candidatura o partido político.
- La revista Boletín México es una publicación periódica, cuya edición número 16, publicada en marzo de 2019, aborda diversas temáticas de interés general para la población de Quintana Roo.
- La publicación no tuvo como fin publicar y difundir la entrevista e imagen del C. Carlos Hernández Blanco, ni fue publicada ex profeso para difundir la entrevista.
- La publicación en comento, fue publicada fuera del periodo de campañas, por lo que no pudiera considerarse como un gasto de campaña.
- La entrevista realizada dentro de la publicación denunciada, es un auténtico ejercicio periodístico, amparado en la libertad de expresión, sin que exista la finalidad de posicionar indebidamente a un candidato.

Los escritos de respuesta al emplazamiento constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hacen prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

Asimismo, esta autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, una inspección ocular, a fin de dar fe de la existencia y contenido de direcciones electrónicas [www.boletinmexico.com](http://www.boletinmexico.com), <http://bmnoticias.com/> y <http://bmnoticias.com/download/7026/><sup>3</sup>:

En atención a lo requerido, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/DS/1077/2019, remitió la certificación realizada mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/117/2019, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:

1. <http://bmnoticias.com/> Se visualiza una página denominada “*BM Noticias*”, en el encabezado se observa la fecha e iconografías en redes sociales, seguido del logotipo del portal en color gris.
2. [www.boletinmexico.com](http://www.boletinmexico.com) Al digitar la dirección electrónica y dar clic en la tecla “*ENTER*”, el navegador redirige inmediatamente a la liga <http://bmnoticias.com/>.
3. <http://bmnoticias.com/download/7026/> Al digitar la dirección electrónica en el navegador y dar clic con la tecla “*ENTER*”, el equipo inicia una descarga de un archivo denominado “*Revista-16-2019-baja.pdf*”, el cual es alojado automáticamente en la carpeta de “*Descargas*” del equipo de cómputo.

Asimismo, se anexó un disco compacto en el que obra un archivo que contiene cuatro imágenes visibles en la certificación y el archivo “*Revista-16-2019-baja.pdf*”, perteneciente a la versión electrónica de la publicación 16, del mes de marzo de 2019, de la revista “Boletín México (BM)”.

Dichas documentales y disco compacto, tienen el carácter de documental pública, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, con relación al artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

---

<sup>3</sup> La solicitud de certificación se encuentra en las páginas 3 y 12 del escrito inicial de queja.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

En el mismo orden de ideas, en atención a lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja<sup>4</sup>, se giró oficio a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, a efecto de solicitarle lo siguiente:

- Informe si existía algún procedimiento ordinario u especial sancionador iniciado por ese Instituto Electoral, en el que se hayan denunciado los hechos materia de análisis, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, y en caso afirmativo, indicara el estado o fase procesal que guarda el procedimiento respectivo.
- En caso negativo, se le daba vista del escrito de queja, junto con los anexos referidos en el mismo, para que, en el ámbito de su competencia determinara lo que en derecho correspondiera.

En atención a lo requerido, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante oficio SE/862/2019, informó:

- Que no existía procedimiento alguno iniciado en contra del Partido Revolucionario Institucional y/o de su candidato a Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco, relacionados con los hechos contenidos en el escrito de queja referido.
- Que la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, procedería a realizar el análisis respectivo y, en su caso, iniciaría el procedimiento sancionador con motivo de la vista efectuada.
- Asimismo, posteriormente se informó a esta autoridad que, derivado de la vista formulada se emitió la constancia de registro del procedimiento especial sancionador número IEQROO/PES/120/19, en el cual se emitió el auto de reserva de admisión<sup>5</sup>.

El oficio en comento, tiene el carácter de documental pública, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, con relación al artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena

---

<sup>4</sup> Respecto a la denuncia por presuntos actos anticipados de campaña realizados por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco, por los mismos hechos materia de análisis en la presente Resolución.

<sup>5</sup> Lo anterior, informado mediante oficio SE/903/19.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Por otra parte, a efecto que esta autoridad se allegara de la información necesaria para resolver el procedimiento de queja citado al rubro, la autoridad fiscalizadora requirió mediante oficios INE/JLE/VE/0230/2019 e INE/JLE/VE/0230/2019 al Representante y/o Apoderado Legal de la revista “BM Boletín México” y/o “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”, así como a la C. Estefhany Irais Cervantes Pat,<sup>6</sup> lo siguiente:

- Señale el nombre completo de la persona física o moral propietaria de la revista “BM Boletín México”, y “bm noticias”, remitiendo la documentación soporte que acredite su dicho.
- Explique los motivos por los cuales tanto en la portada como en el cuerpo de la publicación número 16, del Año 1, de la revista que representa, aparece la imagen y una entrevista al C. Carlos Rafael Hernández Blanco.
- Indique si lo anterior se realizó a título oneroso (inserción pagada); si se trató de una aportación a la campaña del citado candidato, o bien, se trató de notas periodísticas.
- Señale la persona física, moral o partido político que solicitó la nota informativa o inserción pagada a favor del C. Carlos Rafael Hernández Blanco.

En atención a lo requerido, la Representante Legal de “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”, mediante oficio sin número<sup>7</sup>, informó lo siguiente:

- Que la persona moral “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”, es la empresa responsable de la edición y publicación de la revista “BM Boletín México”.

---

<sup>6</sup> Lo anterior, toda vez que del contenido de la revista en comento, se desprende que la persona moral Canales Informativos y de opinión, S.A. de C.V. es la encargada de la producción de la revista referida y la C. Estefhany Irais Cervantes Pat, es la editora de la revista en comento.

<sup>7</sup> Mediante el cual, señala que da contestación a los oficios INE/JLE/VE/0230/2019 e INE/JLE/VE/0230/2019.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

- La revista “BM Boletín México” es una publicación con frecuencia catorcenal, que circula en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Tiene un tiraje de 2,500 (dos mil quinientos) ejemplares, que se distribuyen de manera gratuita y que se pueden obtener en restaurantes, cafés, agencias automotrices, en general, en lugares considerados públicos y de alto tráfico de gente.
- Su principal eje son la opinión y el análisis de temáticas como la política, cultura y el ámbito empresarial.
- El contenido se sube a las plataformas de redes sociales y página web, en formato digital, mismo que puede ser descargado de manera gratuita.
- Las entrevistas y reportajes que aparecen en la revista “BM Boletín México” no son pagados.
- Se invita a personalidades destacadas, con el fin de obtener entrevistas, opiniones y posicionamientos, para publicar en sus ediciones, considerando siempre tener un equilibrio, sin tendencias ni favoritismos, manteniendo el carácter imparcial en el contenido.
- Dentro de las personas que han aparecido en las entrevistas publicadas en las ediciones de la revista “BM Boletín México”, se encuentran líderes de cámaras empresariales, Directores de empresas importantes a nivel regional, líderes de movimientos sociales y asociaciones civiles, así como políticos de tres estados de la península. En ningún caso de los mencionados, se recibió pago alguno, ni monetaria, ni en especie.
- En ejercicio de su libertad de prensa, el 24 de enero de 2019, el Director General de la revista “BM Boletín México”, envió un escrito invitación al C. Carlos Hernández Blanco, a efecto que concediera una entrevista, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:
  - La revista Boletín México es una publicación catorcenal, de corte político y empresarial.
  - Se solicita la oportunidad de conceder una entrevista.
  - Que las entrevistas y reportajes que realizan no son pagados.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

- Que la entrevista realizada al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, no implicó una contraprestación de tipo económico, ya que no es política de la empresa, ni de la revista.
- Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V., así como la revista “BM Boletín México”, están comprometidas a informar de manera objetiva e imparcial y siempre con irrestricto respeto a las leyes, lo que les permite la libertad de prensa y de expresión.
- Las publicaciones efectuadas en la revista “BM Boletín México” nunca han sido tendenciosas ni han tenido como objeto favorecer a ningún sector político ni social.

El escrito en comento, así como la carta invitación signada por el Director General de la revista “BM Boletín México”, de fecha 24 de enero de 2019; constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hacen prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Por lo anterior efecto de verificar si la información proporcionada por la citada Representante Legal<sup>8</sup>, la autoridad fiscalizadora procedió a consultar la página web <http://bmnoticias.com/>, específicamente las versiones electrónicas de las ediciones publicadas en la revista “BM Boletín México”, obteniendo como resultado dos entrevistas, la primera realizada al C. Arturo Castro Duarte, aspirante al cargo a Diputado Local por el Distrito X, en el estado de Quintana Roo, así como al C. Guillermo Brahms, candidato a Diputado Local por el Distrito I, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

---


<sup>8</sup>Respecto a que las entrevistas y reportajes que aparecen en la revista “BM Boletín México”, se invitan a diversas personalidades destacadas, para obtener entrevistas, posicionamientos y opiniones, que publican en sus diferentes ediciones, sin que existan tendencias, ni favoritismos, manteniendo siempre equilibrio e imparcialidad en el contenido de la revista.



**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

Descripción	Imagen
<p>Nombre: C. Arturo Castro Duarte. Aspirante a Diputado Local por el Distrito X, en el estado de Quintana Roo. Publicación número 13, de enero de 2019.</p> <p>En la edición en comento se puede observar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que contiene el candidato.</li> <li>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</li> <li>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano. Siete preguntas con temas sobre sus aspiraciones políticas, familia, descripción personal, valores y propuestas para mejorar Playa del Carmen.</li> <li>- No existe opinión sobre la entrevista, por parte de la revista.</li> </ul>	   
<p>Nombre: Guillermo Brahms. Candidato a Diputado Local por el Distrito I, en el estado de Quintana Roo, del Partido Verde Ecologista de México. Publicación número 20, de mayo de 2019.</p> <p>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que contiene el candidato.</p>	

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

Descripción	Imagen
<p>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</p> <p>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano y cuatro imágenes pequeñas. Once preguntas con temas sobre su carrera política, valores, descripción personal, seguridad, turismo, y propuestas para mejorar el Distrito I.</p> <p>- No existe opinión sobre la entrevista, por parte de la revista.</p>	

Ahora bien, de la comparación realizada respecto al contenido de la entrevista denunciada, con el contenido de las entrevistas antes mencionadas, las cuales fueron publicadas en la misma revista, se obtiene lo siguiente:

Revista "BM Boletín México"		
Publicación número 16, de marzo de 2019. (Publicación denunciada)	Publicación número 13, de enero de 2019	Publicación número 20, de mayo de 2019.
Nombre: C. Carlos Hernández Blanco. Aspirante a candidato a Diputado Local por el Distrito	Nombre: C. Arturo Castro Duarte. Aspirante a Diputado Local por el Distrito X, en el estado de Quintana Roo.	Nombre: Guillermo Brahm. Candidato a Diputado Local por el Distrito I, en el estado de Quintana Roo, del Partido Verde Ecologista de México.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

Revista “BM Boletín México”		
Publicación número 16, de marzo de 2019. (Publicación denunciada)	Publicación número 13, de enero de 2019	Publicación número 20, de mayo de 2019.
<p>XI, en el estado de Quintana Roo.</p> <p>En la edición en comento se puede observar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que aspira.</li> <li>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</li> <li>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano, consistente en once preguntas con temas sobre su carrera política, la política a nivel nacional, su experiencia como Presidente Municipal y propuestas de cómo se puede mejorar Cozumel.</li> <li>- No se advierte opinión o posición a favor o en contra por parte del entrevistador con relación a las manifestaciones realizadas por la persona entrevistada.</li> </ul>	<p>En la edición en comento se puede observar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que aspira.</li> <li>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</li> <li>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano, consistente en siete preguntas con temas sobre sus aspiraciones políticas, familia, descripción personal, valores y propuestas para mejorar Playa del Carmen.</li> <li>- No se advierte opinión o posición a favor o en contra por parte del entrevistador con relación a las manifestaciones realizadas por la persona entrevistada.</li> </ul>	<p>En la edición en comento se puede observar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la portada: la fotografía, nombre y cargo al que contiene el candidato.</li> <li>- En la hoja del contenido: una de las fotografías que pertenecen a la entrevista del candidato.</li> <li>- La entrevista: dos hojas a color, con dos imágenes del candidato de tamaño mediano y cuatro imágenes pequeñas, consistente en once preguntas con temas sobre su carrera política, valores, descripción personal, seguridad, turismo, y propuestas para mejorar el Distrito I.</li> <li>- No se advierte opinión o posición a favor o en contra por parte del entrevistador con relación a las manifestaciones realizadas por la persona entrevistada.</li> </ul>

En este contexto, del análisis a las ediciones antes referidas de la revista “BM Boletín México”, publicadas en los meses de enero, marzo y mayo de 2019, se desprende lo siguiente:

- Los temas de las diversas entrevistas son muy similares, teniendo como eje principal la carrera política, valores, descripción y propuestas de los entrevistados para mejorar determinados Distritos en el estado de Quintana Roo.

- En ninguna de las entrevistas tiene como finalidad enaltecer o disminuir aspectos, características o cualidades de los entrevistados. No se puede observar favoritismo o denostación de los entrevistados en las ediciones señaladas.
- Las tres entrevistas son encaminadas a obtener opiniones y posicionamientos sobre temas diversos, sin que se pueda observar el planteamiento de preguntas insidiosas o favorecidas hacia determinada persona entrevistada.
- En las entrevistas no se desprende la opinión respecto algún tema, de quienes editan o publican la revista “BM Boletín México” a favor o en contra de alguno de los entrevistados.

#### **B) Propaganda electoral, libertad de expresión y análisis de la entrevista.**

Ahora bien, a efecto de determinar si la publicación realizada en la revista “BM Boletín México” número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019, por la realización de una entrevista al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, constituye propaganda electoral susceptible de reporte en el informe de campaña correspondiente, o bien, si dicha entrevista se realizó bajo el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y derecho a la información, se considera pertinente realizar un análisis a la luz de lo establecido en la normatividad electoral, tomando en cuenta los criterios y sentencias emitidos por los órganos jurisdiccionales.

Al respecto es importante destacar lo siguiente:

La legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: propaganda electoral, institucional y político-electoral.

El doctrinario José María Desante-Guanter define a la propaganda como *la transmisión de una idea o de una ideología por medios publicitarios, teniendo una reducida dosis de objetividad, pues está sujeta a la natural discrepancia de criterios por parte de los sujetos receptores de dicha transmisión.*<sup>9</sup> Tal concepto ya ha servido de base para la Sala Superior para la realización de pronunciamientos en el tema dentro de la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-474/2011.

---

<sup>9</sup> Desante-Guanter, José María; “LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES”; Editorial Porrúa; Edición 30ª; México, 1998; pág. 675.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su contenido lo siguiente:

*En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral federal dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, programa o plataforma política de partido político o la invitación a ser afiliado a este.*

*Por su parte, el propio orden legal señala sobre la propaganda electoral, que esta es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito de promover la obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.*

*Así, debe entenderse que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular determinadas conductas políticas. En tanto que la propaganda electoral tiene un propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas ideas.*

*Esto es, mientras la primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico; la segunda está íntimamente ligada a la campaña de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar a acceder al poder.<sup>10</sup>*

De lo anterior se advierte, para que una propaganda sea considerada política, la misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas políticas.

Por su parte, atendiendo de igual forma el contenido de la propaganda, será electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales colocando en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un programa de acción (entiéndase Plataforma Electoral) y propuestas específicas.

Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión constituyen propaganda electoral es necesario realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante un Proceso Electoral.

---

<sup>10</sup> SUP-RAP-0474-2011, así como en el SUP-RAP-0121-2014.

Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la información.

Lo anterior cobra relevancia ya que de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los límites al ejercicio del derecho a la información por parte de los periodistas, tiene como finalidad evitar “posibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita.

A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron algún beneficio derivado de los actos denunciados sujetos de escrutinio y que los mismos pudieran constituir un gasto de campaña, resulta conveniente rescatar lo referido en la Tesis LXIII/2015 bajo el rubro **GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN**, en la cual se establecen los elementos indispensables para identificar la propaganda electoral, entre los cuales se destaca la finalidad de generar un beneficio a algún actor político.

En ese mismo tenor, es importante señalar que **las restricciones a la propaganda electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la información**, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-RAP-234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.

Ahora bien, es importante detenerse y realizar un posicionamiento por cuanto hace al derecho a la libertad de expresión, el cual se encuentra consagrado en el artículo 6, y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por cuanto hace a los artículos 6 y 7 de la Constitución cabe precisar que en el primero se establece el derecho de toda persona a acceder a la información, así como difundir sus propias ideas, ahora bien, el artículo 7 establece la libertad que

tiene toda persona de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

Asimismo, resulta importante referir lo considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso conocido como Olmedo Bustos y Otros vs. Chile mediante sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil uno.

En ella se interpreta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se afirmó que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, una individual y una social o colectiva<sup>11</sup>.

De igual forma, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión constituyen un bastión fundamental para el debate durante el Proceso Electoral, al transformarse en herramienta esencial para la formación de la opinión pública y, con ello, fortalecer la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas de los distintos actores políticos, lo cual permite mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.

A su vez, en el caso Ivcher Bronstein vs Perú, la citada Corte se ha manifestado sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al señalar que constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática y condición fundamental para el progreso y desarrollo personal de cada individuo; por lo que refiere, no sólo debe garantizarse la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquéllas que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado.

---

<sup>11</sup> 65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (...)”

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

Lo anterior, se encuentra resguardado en las tesis jurisprudenciales **P./J. 25/2007 y P./J. 24/2007** bajo los rubros: **‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO’ y ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO’**.<sup>12</sup>

Con los elementos que antes se han analizado se puede arribar a la conclusión de que cuando se realizan reportajes en tiempos de un Proceso Electoral respecto de un partido político o un candidato, lo lógico es que en dicho reportaje se presente imágenes del tema del mismo, así como que se haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretende aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo. En ese orden de ideas, si en un reportaje un candidato lleva a cabo actos de propaganda electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, entre los que, por supuesto, en tiempo de campaña electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de los candidatos.”<sup>13</sup>

Cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la información tales como:

- ✓ SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género periodístico de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la crónica, tanto como el periodismo de opinión en sus modalidades de editorial,

<sup>12</sup> Se puede consultar <https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/Apendice%20Pleno.pdf>

<sup>13</sup> Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009.



comentario y denuncia ciudadana, se encuentran amparados en el derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución.

- ✓ SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los noticieros de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas al procedimiento electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y comentaristas. Lo anterior está circunscrito en el ámbito de libre expresión de pensamiento e información”
- ✓ SUP-RAP-38/2012 ha sustentado que en la libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino que incluye el derecho a comunicarla por cualquier medio.
- ✓ SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte de un genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la Jurisprudencia 15/2018 bajo el rubro **PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA**, razón por la cual se deben presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas y libres salvo prueba en contrario, es por ello, que la libertad de expresión es un pilar indispensable en una sociedad democrática, ya que esto constituye una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los ciudadanos.

Asimismo, mediante la tesis jurisprudencial 11/2018 bajo el rubro **LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO** establece que la libertad de expresión es un elemento fundamental en la vida democrática del país, y debe maximizarse su protección para mayor claridad se enuncia:

Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial “**LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO**”<sup>14</sup>:

En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consisten básicamente en las siguientes:

- Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar las libertades de expresión e información y con el propósito de fortalecer el Estado democrático.
- Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados por las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos que se refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir en acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran ser de interés del público al que se encuentran dirigidos.
- Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por lo que su ejercicio no se restringe a describir los hechos tal y como sucedieron en la realidad; matiz que generalmente se presenta en los artículos o columnas de opinión, como acontece con aquellas publicaciones objeto de estudio.
- En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico, de información y de libertad de expresión, en razón de las características antes aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se encuentra amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo 6° Constitucional.

---

<sup>14</sup> “Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.”

Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios impresos, se generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la sociedad.

Esta autoridad, de acuerdo al criterio de la Sala Superior, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos límites. En el presente caso las notas periodísticas deben contener limitaciones las cuales son:

- **Objetividad.** Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos deben desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones del reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones en el electorado.
- **Imparcialidad.** El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor opción, o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus propuestas
- **Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia del reportaje.** Si un reportaje se caracteriza por proporcionar mayor información que cualquier otro género periodístico, entonces es claro que dicho reportaje debe encontrarse debidamente identificado como tal y la información que busca proporcionar tiene que encontrarse debidamente contextualizada, de tal forma que no se genere confusión en el electorado.
- **Forma de transmisión.** A diferencia de la de los promocionales o spots, el reportaje debe concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una entrevista se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional.
- **Período de transmisión.** Dada la posibilidad que los reportajes políticos en torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, hagan referencia a propuestas políticas, o bien, los candidatos lleven a cabo actos de promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, la época de veda, o bien, el período entre la finalización de las precampañas y el inicio de las campañas electorales, por mencionar algunos.

- **Gratuidad.** Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del reportero a efecto de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o personaje de relevancia, entonces es claro que los reportajes que se realicen en materia política respecto de partidos o candidatos en forma alguna deben implicar el pago de una contraprestación económica por concepto de realización del reportaje y, mucho menos de su transmisión o difusión, porque ello implicaría la contratación o adquisición de espacios en los medios masivos de comunicación en contravención a las disposiciones aplicables.

No obstante lo referido, esté órgano colegiado no pasa desapercibida la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “**PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA**”, la cual establece con claridad que solo puede desvirtuarse la actuación de los medios de comunicación y diarios cuando exista prueba en contrario, lo que en el caso en concreto no sucede.

De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las siguientes premisas:

1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o genuinas están permitidas.
2. La información difundida por los noticieros de radio y televisión o prensa como cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los mismos no se considera propaganda electoral por ser una actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
3. Que debe salvaguardarse el ejercicio de la libertad periodística, aunado a que ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación que sea más favorable a la protección de la labor informativa.

De todo lo anterior, se concluye que, en el sistema jurídico nacional, el legítimo ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no trastoque los límites previstos para esta, y especialmente en aquellos casos en que su contenido resulta relevante para formar la opinión pública –lo que incluye la información relativa a asuntos de interés público o relativo a personas con proyección pública–, pues ello contribuye a la consolidación de los valores democráticos.

Ahora bien, por cuanto hace a la labor periodística consistente en **entrevistas**, cumplen funciones propias del derecho a la información de los miembros de una sociedad, para proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de interpretar rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes, o servir como instrumentos de enseñanza; es decir, fomentar una opinión pública suficientemente informada.

Es decir, las entrevistas **son ejercicios de definición y transmisión** de información en los que también podemos encontrar contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando los datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por lo que no se restringen a describir los hechos tal y como sucedieron en la realidad.<sup>15</sup>

A mayor abundamiento, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-1/2017, estimó que, tratándose de ejercicios periodísticos, (como lo son las entrevistas) las libertades de expresión e información gozan de una protección especial frente a los límites oponibles a esos derechos, ya que éstas, deben ser valoradas no sólo en la dimensión individual de la persona que genera o busca información, sino en la dimensión colectiva, en la cual, los periodistas tienen una posición trascendental para generarla y a la vez permitir a la sociedad en general a recibir dicha información.

Sobre el tema, ese órgano jurisdiccional ha asumido el postulado de protección al periodista y el ejercicio de su labor, a través de **entrevistas**, reportajes, crónicas o paneles, sosteniendo que en el marco de un Proceso Electoral, debe privilegiarse la interpretación a favor de la protección y potenciación del discurso político, efectuado entre otros aspectos, en el libre ejercicio de una candidatura a un cargo de elección popular contra las posibles interpretaciones restrictivas de tales libertades y de protección al periodismo.<sup>16</sup>

De igual forma, dicho tribunal ha señalado que cuando **se realizan reportajes** en tiempos de campaña respecto de un partido político o un candidato, lo lógico es que en dicho reportaje se presente imágenes del tema del mismo, así como que se haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretende aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Lo anterior, conforme a lo establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia recaída en el expediente SRE-PSC-43/2017.

<sup>16</sup> De conformidad a lo establecido en las sentencias identificadas como SUP-REP-190/2016 y acumulado y SUP-REP-1/2017

<sup>17</sup> Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009.

De igual forma, resulta relevante lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>18</sup>, al señalar que debe prevalecer la libertad de expresión y de información con independencia de que **la difusión de una entrevista se haya realizado en la etapa de intercampañas** del Proceso Electoral del que se trate, dada su transcendencia en el ámbito de un país democrático y el tipo de información contenida en la misma.

Así las cosas, uno de los canales en donde se materializa la labor periodística de **entrevistar**, es a través de las **revistas**, los cuales son medios impresos de circulación masiva, producidas periódicamente, pero hay que acentuar que a su vez son productos comerciales y medios de venta; por lo que destacan por su calidad visual. Entre las características que poseen las revistas, destacan:

- Puede emplear diversos géneros periodísticos, entre ellos análisis de acontecimientos noticiosos o entrevistas.
- Son diseñadas para alcanzar grupos demográficos específicos tales como grupos ocupacionales, grupos de interés, grupos políticos, etc.
- Guardan una estrecha relación con las tendencias sociales, demográficas y económicas, por lo que las revistas para permanecer en el gusto de la gente, deben actualizar de manera continua su imagen, contenido, a efecto de orientarlas a la satisfacción de las necesidades del consumidor.

En virtud de lo anterior, esta autoridad considera que la entrevista realizada al C. Carlos Rafael Hernández Blanco candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, misma que fue publicada en la revista “BM Boletín México” número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019 se encuentra amparada en un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, toda vez que no se advierte de su contenido que pudiera encuadrarse dentro del género de propaganda electoral a la luz de los razonamientos y consideraciones antes señalados.

---

<sup>18</sup> A través de la emisión de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SRE-PSD-481/2015.

A mayor abundamiento, de las investigaciones realizadas por esta autoridad en torno a la entrevista materia de análisis se desprende que:

- En la revista “BM Boletín México” número 16, Año 1, del mes de marzo de 2019, se desprende la entrevista realizada al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, en su calidad de aspirante al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo.
- En el mes en que se publicó la revista referida (marzo 2019), estaba en curso el periodo de intercampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2018- 2019 en el estado de Quintana Roo<sup>19</sup>
- Los sujetos incoados al dar respuesta a los emplazamientos formulados por esta autoridad, manifestaron que la entrevista es un auténtico ejercicio periodístico, amparado en la libertad de expresión.
- La Representante Legal de “Canales Informativos y de Opinión, S.A. de C.V.”,<sup>20</sup> informó que:
  - La revista “BM Boletín México”, es una publicación con frecuencia catorcenal, que circula en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, cuyo contenido se sube a las plataformas de redes sociales y pagina web, en formato digital, mismo que puede ser descargado de manera gratuita.
  - En ejercicio de su libertad de prensa, el 24 de enero de 2019, el Director General de la revista “BM Boletín México”, envió un escrito invitación al C. Carlos Hernández Blanco, a efecto que concediera una entrevista.
  - Que la entrevista realizada al C. Carlos Rafael Hernández Blanco, **no implicó una contraprestación de tipo económico**, ya que no es política de la empresa, ni de la revista.

---

<sup>19</sup> De acuerdo al Calendario integral Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 del Instituto Electoral de Quintana Roo, consultable en el link: [http://www.iegroo.org.mx/2018/descargas/2018/CAL\\_INTEGRAL\\_2018.pdf](http://www.iegroo.org.mx/2018/descargas/2018/CAL_INTEGRAL_2018.pdf)

<sup>20</sup> Empresa responsable de la edición y publicación de la revista “BM Boletín México”.

- Las publicaciones efectuadas en la revista “BM Boletín México”, nunca han sido tendenciosas, ni han tenido como objeto favorecer a ningún sector político, ni social, las cuales fueron realizadas en libertad de prensa y de expresión.
- De la revisión a las versiones electrónicas de las ediciones publicadas en la revista “BM Boletín México”, se obtuvo como resultado la publicación de dos entrevistas realizadas en los meses de enero y mayo de 2019, la primera realizada al C. Arturo Castro Duarte, aspirante al cargo a Diputado Local por el Distrito X, en el estado de Quintana Roo, así como al C. Guillermo Brahms, candidato a Diputado Local por el Distrito I, en el estado de Quintana Roo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México.
- Del ejercicio de ponderación realizado respecto al contenido de la entrevista denunciada, con el contenido de las entrevistas antes mencionadas, no se advierte favoritismo, tendencia a favor de los sujetos incoados, así como tampoco tenga como finalidad enaltecer aspectos, características o cualidades del candidato denunciado, o en su caso, una posición u opiniones a favor de los denunciado por parte del entrevistador.
- De las actuaciones que obran en el expediente no se advierte que la actuación de la empresa responsable de la edición y publicación de la entrevista en comento en la revista “BM Boletín México” no la haya realizado en ejercicio a su labor periodística, libertad de expresión e información.<sup>21</sup>
- Derivado del análisis efectuado por esta autoridad a la publicación objeto del estudio, es dable concluir que la misma, no constituyen propaganda político-electoral.
- Si bien la publicación de la entrevista se realizó en el periodo de intercampañas debe prevalecer la libertad de expresión y de información con independencia de que su difusión se realizara en dicha etapa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Conforme a lo establecido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “**PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LÍCITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA**”

<sup>22</sup> Conforme a lo establecido en la sentencia identificada con la clave alfanumérica SRE-PSD-481/2015.



- Este Consejo General tiene por acreditado que se trata del ejercicio libre del periodismo, amparado bajo la libertad de expresión de quien edita y publica, pues aun cuando el quejoso argumenta en su escrito, que dicha publicación constituye un gasto susceptible de reporte por tratarse de propaganda electoral a favor del candidato Carlos Rafael Hernández Blanco, lo cierto es que fue una entrevista publicada en un revista que dada sus características, resulta viable que se presenten imágenes del tema abordado, así como que se haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretende aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.<sup>23</sup>
- Estimar lo contrario, implicaría una limitación injustificada y arbitraria de la libertad de expresión y labor del periodismo, en congruencia con los criterios, tesis y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse en forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o extensiva para potenciar su ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten elementos para acreditar la existencia de conducta infractora alguna cometida por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito XI, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco; por lo que se concluye que no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 121 y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente procedimiento debe declararse **infundado**.

**4. Medio de impugnación.** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los

---

<sup>23</sup> Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se declara **infundado** el presente procedimiento instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato a Diputado Local por el Distrito XI, ubicado en Cozumel, en el estado de Quintana Roo, el C. Carlos Rafael Hernández Blanco, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada la presente, al Instituto Electoral de Quintana Roo, para que dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al C. Carlos Rafael Hernández Blanco a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local de dicha entidad, remita a este Instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes después de haberla practicado.

**TERCERO.** Notifíquese la presente Resolución a los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/103/2019/QROO**

**CUARTO.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de julio de 2019, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**